

C.A. de Santiago

Santiago, siete de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Por sentencia de ocho de mayo del año en curso, dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en la causa RIT N°429-2023, se resolvió:

1) Condenar a los acusados **Felipe Andrés Curín Córdova** y **Pablo César Mella Morales** como **autores del delito consumado de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes**, previsto y sancionado en el **art.150 D del Código Penal**, en perjuicio de **Jorge Antonio Samanez Cabrera**, acaecido el 30 de abril de 2018, en la comuna de Independencia, Santiago, a la pena de **540 días de presidio menor en su grado mínimo** respecto del acusado **Curín Córdova**, y de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, respecto del acusado Mella Morales y **a la accesoría del art. 30 del Código Penal, esto es, la de suspensión de cargo u oficio público** durante el tiempo de la condena, eximiéndoseles del pago de las costas de la causa.

2) Sustituir las penas corporales impuestas por la de remisión condicional de la pena del art.3 y 4 de la Ley 18.216, debiendo someterse los sentenciados al control de Gendarmería de Chile por el plazo de 540 días, en el caso del condenado Curín Córdova, y de un año en el caso del condenado Mella Morales, una vez ejecutoriada esta sentencia.

Solo la defensa del acusado **Felipe Andrés Curín Córdova** dedujo contra la sentencia recurso de nulidad fundado, en forma principal, en las causales de las letras a) y b) del artículo 373 del Código Procesal Penal y como causal subsidiaria la del artículo 374,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

literal e), en relación con el artículo 342, letra c) y el artículo 297, todos del Código Procesal Penal, y solicita declarar la nulidad del juicio y de la sentencia, retrotrayendo el procedimiento a la celebración de un nuevo juicio oral para que un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no inhabilitado proceda a fijar, citar, y celebrar un nuevo juicio oral en la presente causa

Por resolución de fecha 12 de junio de 2024, la Corte Suprema declaró inadmisibile la causal principal y ordenó remitir a esta Corte el conocimiento de la causal subsidiaria antes señalada.

Con fecha 23 de julio del presente año, tuvo lugar la vista del recurso, ocasión en la que alegaron el defensor privado del acusado condenado; el representante del Ministerio Público y los abogados representantes de los querellantes particulares, fijándose para el día 7 de agosto la comunicación de la presente sentencia.

Considerando:

PRIMERO: Que, como se ha dicho, la defensa del acusado **Curín Córdova**, dedujo contra la sentencia recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 374, literal e), en relación con el artículo 342, letra c) y el artículo 297, todos del Código Procesal Penal, esto es la causal de nulidad absoluta consistente en que en la sentencia se ha omitido *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentan dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal”*.

Por su parte, el artículo 297 dispone que *“Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

A juicio del recurrente, –y luego de reproducir sin mayor explicación páginas completas de la sentencia impugnada y en una exposición extremadamente confusa y prácticamente ininteligible en su redacción y concatenación lógica de la argumentación que pretende hacer valer—, la sentencia infringe las reglas de valoración de la prueba, en particular el principio de razón suficiente y no contradicción, vulnerando lo dispuesto en el artículo 297 inciso final CPP, por no ser posible reproducir el razonamiento del Tribunal. En particular, a su juicio el tribunal de mayoría debió haber indicado aquellos hechos o circunstancias que desestimó, y aquellas circunstancias que derechamente fueron omitidas en la sentencia, no indicando motivo alguno para desestimar o razonar de porqué en definitiva no se tomó en consideración diversas alegaciones que se hicieron por parte de esta defensa.

Así, y en lo que respecta al principio de no contradicción, considera que la valoración que hace en el considerando octavo de la prueba ofrecida por el acusado en el transcurso del juicio oral no tiene lógica con lo resuelto en el mismo fallo, ya que se contradice en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

cuanto a establecer que las lesiones son realizadas en un inicio al momento de la detención *“Comienzan a trasladarlo por un pasillo, el aprehensor le realiza una llave, y se produce la rotura del hueso húmero derecho, que corresponde al brazo en que tenía secuela. Llega el vehículo policial y lo introducen en él. Luego de unos 25 minutos bajan de su domicilio y parten”*, para finalmente, dentro del mismo considerando asegurar con criterio unánime para condenar al acusado *“respecto al momento de producirse la fractura de la víctima”*, que se considera inequívoca la circunstancia de que esta ocurre *“producto del mecanismo de torsión empleado por Felipe Andrés Curín Córdova, como se muestra en el video”*.

Destaca a este respecto, que el video que el tribunal de mayoría hace referencia muestra la acción del traslado de la víctima en los estacionamientos del departamento de la supuesta víctima, en el cual se identifica a Felipe Andrés Curín Córdova detrás del detenido quien está de blanco frente a él. Sigue y se escucha un sonido “crac” y luego un grito de la víctima, siendo este el momento en que a juicio del tribunal se realiza la lesión a la supuesta víctima, evidenciando una falta de lógica en cuanto a situar el momento de la comisión del hecho en dos circunstancias distintas, pese a todos los testigos y peritos refieren que la lesión se produce al momento de la detención.

Finalmente, en el análisis que se realiza de la prueba desde el considerando octavo en adelante, señala que la defensa evidenció inconsistencias principalmente con las declaraciones otorgadas por la víctima, testigos y peritos que allí menciona y cuyas declaraciones transcribe, pero sin hacer referencia concretar a cuáles serían dicha inconsistencias.



En cuanto al principio de razón suficiente, sostiene que una serie de afirmaciones del Tribunal contenidas en el motivo octavo de la sentencia, y que se limita nuevamente a transcribir, son las que justifican la condena o acreditación de los apremios ilegítimos en los hechos, y claramente no cumplen con el estándar exigido por la ley

A su juicio, el Tribunal desestima derechamente lo declarado por la propia víctima sobre el momento real de la lesión cuestionada, en la que evidencia y asevera en reiteradas ocasiones el momento exacto en que se produjo la lesión, no siendo considerada por el tribunal, predisponiéndose a fallar con falta de fundamento y lógica el momento de realización física de la lesión.

En su concepto “(...) *una debida valoración de la prueba expuesta en el transcurso del juicio oral y lo que finalmente tiene por acreditado el mismo evidencia que producto de una denuncia se apersonó personal policial al lugar de los hechos, atendido a las características de las circunstancias acaecidas y encontrándose dentro de las hipótesis que nuestra legislación establece como delitos flagrantes, el personal policial realiza todos los actos necesarios para finalmente lograr la detención de la ahora presunta víctima, existiendo resistencia por ella, provocando en el personal policial adoptar procedimientos acordes, en este caso aplicar la fuerza necesaria para superar la resistencia ejercida por la presunta víctima conjuntamente con las técnicas de esposamiento enseñadas en Carabineros. Lo que provoca en definitiva la lesión justificada y amparada por la ley en su artículo 150 letra d) del Código Penal, esto es “no se considerarán como apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean*



inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad”.

Asimismo, resulta relevante la falta de pronunciamiento absoluto del tribunal respecto a lo declarado por la víctima... *“En el trayecto se detienen en un sitio eriazo donde no se veían viviendas, cosa que le llamó la atención...”*, debiendo existir en la parte tanto expositiva como resolutive de la sentencia los argumentos tanto que benefician como aquellos que perjudican a las partes, argumentación que se encuentra ausente en la sentencia recurrida pese a la relevancia de lo indicado. Asimismo, a su juicio el Tribunal habría omitido elementos relevantes de la declaración de Ignacio Eliseo Opazo Monares, Sargento 2do de Carabineros (oficial de caso), del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, quien depuso sobre las diligencias realizadas en Informe Policial N°154 de fecha 23 de Marzo del 2021, y durante la audiencia expuso *“que al momento de confeccionar el informe mantenía 6 meses asuntos internos, lo cual fue omitido en la sentencia, seguidamente, se le exhibió como evidencia el video que ya había sido incorporado del Traslado de la víctima desde el estacionamiento y a la pregunta de la Defensa de MELLA MORALES, sobre otros funcionarios que se observaban en el video que analizó y no indagó, dijo que, “esos funcionarios tenían la obligación de intervenir y no lo hicieron. Dio cuenta de un móvil RP de la Sub Comisaría de Villa Moderna. No pudo establecer la participación de ese vehículo, no contó con la información de esos participantes. Quien tiene la posición de intervenir ante este hecho. La tiene el que toma conocimiento, y si se da cuenta al más antiguo, si toma conocimiento, las actuaciones policiales y administrativas. Al solo hace investigaciones judiciales y no administrativas. Las que*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

diligencia tiene su origen en la investigación. El contexto de la detención fue una denuncia de amenazas con arma de fuego. Mella declaró que los vecinos querían hacer justicia de primera mano. También, que se llamaría al Gope. El despeje es abrir puerta con un martillo gigante y se interviene. Los funcionarios del GOPE hubiesen entrado sin previo aviso”.

Lo anterior a su juicio, evidencia *“la falta de objetividad y consideración en los argumentos y prueba expuesto a lo largo del Juicio Oral, pues ante lo expresado, el tribunal resuelve “(...) mayor abundamiento, pese a que a las defensas les incomodó el testimonio de los funcionarios de carabineros de Chile pertenecientes a la sección de Asuntos Internos...”* aplicando criterios subjetivos a su decisión, perjudicando a esta parte.

Expone asimismo, que *“las alegaciones realizadas durante el juicio por la defensa y expuestas en los alegatos de clausura, derechamente son omitidas en la sentencia condenatoria, lo que llama la atención, dada la relevancia del único testigo especialista, el oficial investigador de esta causa, quien es el único que realiza un análisis pormenorizado del video que registra el hecho, omitiendo información relevante sobre otros funcionarios de Carabineros que se encontraban en escena y que podría haber depuesto sobre el supuesto sonido de rotura del humero y gritos de la víctima, sumado al hecho que no se consigna una pericia audiovisual y de sonido que permitan entregar elementos objetivo y reveladores que permitan formar convicción objetiva”.*

Finalmente, en cuanto a lo expuesto por la perito forense doña Patricia Dina Negretti Castro, quien sostuvo que *“la lesión se realiza producto de un mecanismo de torsión que provocó el dolor intenso,*



se produjo cuando estando en el piso se le levanta por detrás con el pie en la espalda, y llevando los brazos hacia arriba presionando con el pie hacia abajo...”, se evidencia “la ausencia de objetividad en la redacción de la sentencia que se recurre, perjudicando a esta parte en tanto esta declaración del informe pericial no se encuentra incorporada en lo expositivo de la sentencia de forma íntegra, lo que afecta directamente la valoración de la prueba, ya que solo se extrae una breve síntesis que no da cuenta de la valoración absoluta de la declaración sustancial de la perito incorporada. Este raciocinio debe constar de forma suficiente aquellas valoraciones favorables o desfavorables al acusado”.

Finaliza así, sosteniendo que para la afirmación que dio por probada el Tribunal, es decir, que el acusado cometió el delito de apremios ilegítimos “(...) *no tiene una razón suficiente, un razonamiento constituido por inferencias adecuadamente deducidas de la prueba, y ni si quiera es que haya una contradicción, sino que lisa y llanamente hay omisiones importantes en el razonamiento de la sentencia, en consecuencia tampoco es concordante, dicha conclusión, en cuanto a que no responde adecuadamente a un elemento de convicción del cual se puede inferir aquélla (la conclusión)”*.

SEGUNDO: Que a fin examinar la configuración de la causal de invalidación que se esgrime el recurrente, resulta necesario examinar, previamente, los hechos que el Tribunal de fondo tuvo por ciertos y probados, los que se consignan en el considerando noveno de la sentencia, así como su cronología precisa y su calificación jurídica. Al efecto, el tribunal tuvo por establecido que:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

“El 30 de abril del 2018, aproximadamente a las 21:30 horas, Felipe Andrés Curin Córdova y Pablo César Mella Morales, funcionarios de Carabineros de Chile, encontrándose ejerciendo funciones policiales, de patrullaje preventivo, concurrieron al domicilio ubicado de calle Aníbal Pinto N° 1393 comuna de Independencia, debido a una denuncia por Delito de Amenazas con arma de fuego. En este contexto, Felipe Curin Córdova detiene a Jorge Antonio Samanez Cabrera, sindicado por su participación en el delito de amenazas denunciado. Posteriormente y mientras trasladaba al detenido, esposado por la espalda hacia el furgón policial, sin que mediara ninguna provocación o resistencia por parte de Samanez Cabrera, ejerció fuerza irracional e innecesaria, a través de un mecanismo de torsión que le provocó la fractura del humero derecho, generándole un gran dolor e infligiendo intencionalmente a la víctima sufrimiento físico, que se incrementó al no prestarle el auxilio correspondiente a la gravedad de las lesiones. Por otra parte, Pablo César Mella a cargo del procedimiento y en conocimiento de la agresión sufrida por el detenido Samanez Cabrera, no realizó acciones para auxiliar al lesionado, que requería con urgencia atención médica, omitiendo al Fiscal de Turno esta situación, sin informar la gravedad de las mismas, consintiendo de esa manera a aumentar su sufrimiento físico, manteniéndose privado de libertad hasta el día siguiente, después de pasar al control de detención respectivo, impidiendo en consecuencia el tratamiento médico urgente que requería, y los calmantes necesarios para evitar el dolor provocado. Samanez Cabrera, debido a esta agresión sufrió lesiones de pronóstico médico legal grave, que sanan previo tratamiento



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

quirúrgico especializado en 80-90 días, con igual tiempo se incapacidad”.

Los hechos antes descritos configuran a juicio de la mayoría del tribunal, el delito consumado de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, previsto y sancionado en el art.150 D del Código Penal, en perjuicio de Jorge Antonio Samanez Cabrera, acaecido el 30 de abril de 2018, en la comuna de Independencia, Santiago, y en el que les ha cabido participación en calidad de autores, conforme al art.15 N°1 del Código Penal a Felipe Andrés Curín Córdova y Pablo César Mella Morales, por tomar parte en su ejecución de manera inmediata y directa; recalificándose en consecuencia las peticiones formuladas por los acusadores, de condenar por el delito de Tortura, previsto y sancionado en el art.150 A del Código Penal.

TERCERO: Que para dar por establecidos los enunciados fácticos antes transcritos, en el considerando séptimo del fallo y como cuestión previa a la valoración de la prueba, a partir de los alegatos de apertura, clausura y réplica de los intervinientes, de la declaración de los acusados y de la prueba rendida durante el juicio, el Tribunal Oral consignó los siguientes hechos no controvertidos:

1) La existencia del procedimiento llevado a cabo el 30 de abril del 2018, en que participaron los funcionarios de Carabineros de Chile Pablo César Mella Morales, jefe de patrulla a cargo del procedimiento, y en consecuencia, superior jerárquico, Felipe Andrés Curín Córdova, conductor del Z.5892, Pedro Vásquez Catalán y Bárbara Bascuñán Martínez, motoristas.

2) Que concurrieron al domicilio ubicado en calle Aníbal Pinto N°1393 comuna de Independencia, debido a una denuncia por el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

delito de amenazas con arma de fuego, sindicándose como su autor a Jorge Antonio Samanez Cabrera, quien residía en el departamento N°410-B.

3) Que durante el referido procedimiento, Jorge Antonio Samanez Cabrera, sufrió una lesión de pronóstico médico legal grave, que sana previo tratamiento quirúrgico especializado en 80-90 días, con igual tiempo de incapacidad, causada por Felipe Andrés Curín Córdova.

4) Que Jorge Antonio Samanez Cabrera, fue conducido al Hospital San José para su constatación de lesiones.

5) Que Jorge Antonio Samanez Cabrera, permaneció bajo la custodia de carabineros de Chile, desde su detención, hasta su puesta a disposición del Juzgado de Garantía que la controló, por intermedio de personal de Gendarmería de Chile, recuperando su libertad el 01 de mayo de 2018.

De esta forma, y como consigna el fallo con claridad, la discusión en juicio entre los intervinientes se centró en determinar si la lesión causada por Felipe Andrés Curín Córdova fue o no legítima, y en cualquiera de estos casos, si Pablo César Mella Morales, jefe de patrulla a cargo del procedimiento y superior jerárquico, consintió en la aplicación del apremio, no impidió o no hizo cesar la su aplicación, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo.

CUARTO: Que, como es sabido, la causal de nulidad alegada por el recurrente exige más que una mera discrepancia con la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal recurrido, debiendo denunciarse por el recurrente de forma detallada y precisa las infracciones concretas cometidas por el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

Tribunal de fondo a los principios rectores que gobiernan el sistema de valoración de la prueba conforme a la sana crítica, como son: la motivación del fallo a través de una adecuada explicitación del razonamiento probatorio realizado por el juez y la racionalidad de dicha valoración, es decir, su adecuación a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Desde esta perspectiva y tal como señala la doctrina, el control que corresponde y puede realizar esta Corte al conocer de esta causal de nulidad, se circunscribe únicamente a la fundamentación de la sentencia y la verificación de *“si se encuentra justificada la valoración de la prueba como suficiente para condenar o como insuficiente para absolver”* (Daniela Accatino (2009), “Forma y sustancia en el razonamiento probatorio. El alcance del control sobre la valoración de la prueba a través del recurso de nulidad penal”, en Revista de Derecho, p. 357), de manera tal que la Corte no debe ni puede realizar una nueva valoración de la prueba rendida o su suficiencia, sino solo controlar *“la justificación de las conclusiones que sobre la prueba alcanza el tribunal oral”*, es decir, examinar *“las inferencias realizadas por éste y la aplicación del estándar objetivo de prueba”* (Marcela Araya Novoa (2018, *Recurso de nulidad penal y control racional de la prueba*, Librotecnia, p. 79).

Junto a ello y a fin de efectuar una debida labor de control, resulta necesario tener presente, asimismo, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema, que la sana crítica es un sistema de valoración de la prueba en virtud del cual *“(...) el juez aprecia libremente la prueba rendida, atendiendo a criterios objetivos y sujeto al respeto de parámetros racionales, como son los principios de la lógica, los*



conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia, debiendo motivar, exponiendo las razones tenidas en consideración para estimar o desestimar las pruebas. Los principios de la lógica, al igual que las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados sirven, entonces, de guía y límite para el razonamiento del juez; constituyen reglas del correcto razonamiento” (Sentencia Corte Suprema, de 10 de mayo de 2024, Rol N°19.604-2023). Igualmente, se ha señalado que: *“Toda sentencia condenatoria debe ser, por imposición del artículo 340 del Código Procesal Penal, el fruto de la convicción del tribunal sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral que conduzca a los jueces a la certeza, más allá de toda duda razonable, que en los hechos ilícitos ha correspondido a los acusados una participación culpable y penada por la ley. “En este orden de ideas, es la prueba legalmente obtenida, explicada racionalmente y sometida a la pertinente contradicción, la que permitirá destruir la inocencia que durante todo el litigio acompañó a los enjuiciados”* (Sentencia Corte Suprema, de 22 de enero de 2019, Rol N° 29835-2018, c.º 4º y 5º).

QUINTO: Que partiendo de lo anterior, y de una atenta y detallada lectura del fallo impugnado y del recurso deducido, a juicio de estos sentenciadores el motivo de nulidad no puede prosperar y debe ser rechazado en tanto la defensa, como se ha dicho, junto con realizar tanto en lo formal como en lo sustantivo, una desordenada, confusa y desprolija exposición de las supuestas infracciones cometidas por el Tribunal de Juicio Oral, se limita en gran parte del recurso a hacer una mera transcripción de los considerandos del fallo –pretendiendo que esta Corte a partir de ello deba descifrar las supuestas infracciones y contradicciones en que habría incurrido la



sentencia—, y no logra demostrar de qué forma la valoración de la prueba realizada por los jueces del fondo vulnera los principios rectores de la sana crítica aducidos, en particular el principio de razón suficiente y de no contradicción y las reglas de la experiencia, ni de qué forma se habría omitido la valoración de la prueba.

SEXTO: Que, en efecto, basta una somera lectura del fallo para comprender con claridad la forma y razones por las cuales el Tribunal tuvo por establecidos los hechos al tenor de lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal, y aquellas por las cuales se desestimaron las hipótesis cuasidelictuales y absolutorias de las defensas, no siendo posible avizorar infracción alguna a los principios de rigen la valoración de la prueba conforme a la sana crítica.

Así en, primer lugar y en lo que respecta al principio de no contradicción, sostiene el recurrente que el fallo se contradice en cuanto a establecer que las lesiones son realizadas en un inicio al momento de la detención para, finalmente y con criterio unánime para condenar al acusado, considerar inequívoca la circunstancia de que ésta ocurre “*producto del mecanismo de torsión empleado por Felipe Andrés Curín Córdova, como se muestra en el video*”.

Al efecto, nuestra Corte Suprema (Rol N° 16882-2015) ha establecido que, para estar en presencia de una infracción del principio de no contradicción en el contexto del proceso penal, se requiere que el impugnante: (i) Identifique las proposiciones fácticas que se refieren a escenarios idénticos contenidas en la sentencia y; (ii) Señale las conclusiones afincadas en una sola de las proposiciones contradictorias, sin embargo, a que llega el tribunal.

Partiendo de lo anterior, a juicio de estos sentenciadores, sin embargo, no es posible avizorar una falta de lógica en la sentencia en



tanto no ha situado el momento de la comisión del hecho en dos circunstancias distintas. En efecto, en el considerando octavo del fallo, el Tribunal de Juicio Oral desarrolla pormenorizadamente la forma como se tuvo por establecida la secuencia precisa de lo sucedido y los medios de prueba sobre cuya base el Tribunal construyó razonamientos e inferencias para el establecimiento de los hechos que finalmente se tuvieron por establecidos y que resultaron constitutivos del delito por el que fue condenado el acusado, determinando exactamente la cronología de los hechos, el momento exacto en que se produjo la lesión y todas los hechos y circunstancias coetáneas y posteriores a ésta.

En cuanto al momento exacto de la lesión, el asunto tiene relevancia en tanto la defensa sostuvo como tesis alternativa que el imputado habría opuesto tenaz resistencia a su detención, por lo que debió aplicarse la fuerza racional, proporcional y necesaria para su reducción y que finalmente provocó la fractura, y que esto habría acontecido en el interior del departamento y no durante su traslado al vehículo policial. Por ello, la lesión sería producto de la utilización de una fuerza legítima que no puede ser considerada como tortura ni apremios.

Al respecto, cabe destacar que, durante el curso del juicio, la defensa planteó la existencia de estas mismas contradicciones que alega en el presente recurso con motivo de las declaraciones de la propia víctima, así como de los testigos de la fiscalía y los querellantes, en las que constaría que la fractura se habría producido en el momento de la detención.

Al efecto, y tal como se da cuenta en el fallo, el Tribunal examinó con detención dichas declaraciones.



Así, revisa la declaración del hermano de la víctima Víctor Alberto Samanez Cabrera en la que consta que “(...) *aunque no estuvo presente al momento de la detención, refirió al ejercicio del artículo.332 del Código Procesal Penal para evidenciar contradicción que, “posteriormente su hermano le comentó que la fractura se la provocaron al esposarlo y levantarlo del suelo para trasladarlo”*. Luego, revisa la declaración de “(...) *la testigo Virginia Cabrera De Samanez, madre de la víctima, en declaración de 05 de mayo de 2022 ante la fiscalía, sostuvo que “(...) mi hijo salió lo tiraron al suelo, con un pie en la espalda, lo amarraron y lo jalonearon con mucha fuerza y le quebraron el brazo.” Agregando que, ella no sabía cuándo fue que le quebraron el brazo, fue su hijo quien dijo que fue en el traslado*. Del mismo modo, examina la declaración de la perito Patricia Dina Negretti Castro, que “(...) *habría señalado que el mecanismo de torsión que provocó el dolor intenso se produjo cuando estando en el piso se le levanta por detrás con el pie en la espalda, y llevando los brazos hacia arriba presionando con el pie hacia abajo*”. Por su parte, analiza los dichos del perito Gerardo de La Fuente Ceballos, “(...) *a quien la víctima le relató que el 30 de abril de 2018 fue detenido por carabineros, ocasión en que se le realizó una torsión que le provocó mucho dolor*” y lo expresado por “Hugo Aguirre Astorga, a quien la víctima le dijo que, se hizo una torsión al momento de su detención que fracturó el húmero”. Finalmente, examina la propia declaración de la víctima Jorge Antonio Samanez Cabrera invocada por la defensa, quien, en declaración de 20 de junio de 2018 ante la fiscalía, sostuvo que “(...) *inmediatamente me redujo, lo tiró al piso y le esposa con los brazos en la espalda. Una vez esposado el funcionario lo levanta desde los brazos por la espalda y*



sintió un crujido en la espalda.” Y con declaración de 04 de junio de 2018 ante la fiscalía, lee: “cuando estaban en mí dormitorio me arrastran por el suelo lo esposan y lo levanta y lo lesionan”.

Ponderando todos estos antecedentes probatorios en conjunto con el video incorporado al proceso por la víctima en el que se ve el momento de la detención, el Tribunal se hace cargo de las contradicciones alegadas por la defensa y concluye de forma razonada que dichos testimonios no son contradictorios “(...) *sino complementarios, armónicos y concordantes con la secuencia que inicia con el ingreso por parte de funcionarios de carabineros a su departamento para su reducción y detención, para luego esposarlo y trasladarlo hasta el vehículo policial*” de manera tal que, más allá del lugar exacto en que se produjo la fractura, lo cierto es que ésta fue producto de un mecanismo de torsión que provocó un intenso dolor en la víctima y que se verificó o fue aplicado por el imputado “(...) *en varios momentos, aun con crujido de hombro. Por lo demás, lo que se discute aquí es la fractura del húmero derecho, que es aquel hueso que es parte del brazo, que se extiende desde el hombro hasta el codo. Además, las expresiones y contenidos conclusivos de los distintos peritos citados, en lo principal P1) 1.PATRICIA DINA NEGRETTI CASTRO, y luego P2) 3. GERARDO DE LA FUENTE CEBALLOS, P3) 4. HUGO AGUIRRE ASTORGA, coinciden en que la fractura se genera a consecuencia de un mecanismo de torsión, es decir, su conclusión es unánime, y si es que a ello se une, la prueba que no tuvieron a las vista, pero que la judicatura sí, consistente en aquella que fue incorporada como OTROS MEDIOS DE PRUEBA, 6. 2 videos de grabación acompañados por la victima de esta causa sobre los hechos: 1) Se identifica el testigo (Felipe Andrés Curín*



Córdova) detrás del detenido quien está de blanco frente a él. Sigue y se escucha un sonido “crac” y luego un grito de la víctima”.

Frente a este análisis de los elementos probatorios, el Tribunal de fondo descartó así la tesis de la defensa en cuanto a que existiría una duda razonable respecto al momento de producirse la fractura de la víctima, considerando “(...) *inequívoca la circunstancia de ser producto del mecanismo de torsión empleado por Felipe Andrés Curín Córdova, como se muestra en el video*”.

A juicio de esta Corte, y conforme a lo expresado precedentemente, el Tribunal de fondo no ha incurrido en contradicción ni trasgresión alguna a los principios de la lógica, en tanto de la prueba rendida y en particular del video reproducido, el Tribunal estableció de forma razonada y fundada que, más allá del momento preciso de la fractura, ésta fue producto de un mecanismo de torsión aplicado por el imputado en diversos momentos y que generaron finalmente la fractura del húmero de la víctima causándole un dolor intenso.

Junto a lo anterior, y tal y como se consigna en el fallo, a partir esencialmente de los videos de grabación acompañados por la víctima, lo relevante es que el Tribunal desechó la tesis alternativa esgrimida por la defensa en torno a la “tenaz resistencia” que ésta habría opuesto a la detención. El Tribunal rechazada dicha tesis en tanto del video “(...) *es posible observar que el detenido no ofrece ninguna resistencia a su traslado, es más, se encuentra reducido y esposado, en consecuencia ninguna tenaz resistencia de las que los funcionarios Curín, Mella, Vásquez y Bascuñán, presentes en el procedimiento, que han descrito como fundamento de una posible lesión al aplicarse fuerza racional, proporcional y necesaria para su*



reducción, ha debido emplearse en el traslado de la víctima hacia el vehículo policial”.

Esta conclusión es reforzada, a mayor abundamiento, por el testimonio de los propios funcionarios de carabineros de Chile pertenecientes a la sección de Asuntos Internos Jonathan Joel Vidal Arce e Ignacio Eliseo Opazo Monares, quienes “(...) coincidieron al analizar y describir el video en que, en tal situación en que se provocó la fractura a la víctima, no ameritaba el mecanismo de torsión aplicado por el funcionario a cargo del traslado, incumpliendo las reglas relativas al uso de la fuerza”.

Finalmente, y de los diversos testimonios y prueba rendida el Tribunal infiere razonadamente que “(...) a poco de ser detenido SAMANEZ CABRERA, los acusados **tomaron conocimiento de la lesión causada, su padecimiento y dolor, como también de su problema antiguo en el hombro**, tanto así que, Mella dice realizar la coordinación para ser llevado a un centro asistencial, pero a constatar lesiones, sin embargo, este traslado no se produce inmediatamente, ni para aliviar el dolor del detenido, sino alrededor de las 23.44 horas, esto es, a una 01 hora con 20 minutos después, de la detención, a consecuencia que el dispositivo a cargo de Mella, permaneció en el lugar tratando de ubicar e incautar el arma involucrada en la amenaza denunciada. Por supuesto que, es poco verosímil que Curín y Mella, con la información sobre el estado de salud de Samanez Cabrera, y transcurrida una 01 hora con 20 minutos desde la detención, con la víctima quejándose de la fractura y siendo trasladado por el propio Curín como conductor del móvil Z.5892, en compañía del mismo Mella, no hayan tomado conciencia de la gravedad de la lesión del detenido, constando de manera cierta su



sesgo respecto de SAMANEZ CABRERA, tal como lo indicaren, ignorándolo por cuanto “A pesar del dolor en el hombro, lo trasladó esposado. Porque todos los detenidos acusan lo mismo”, “No hizo diligencias para establecer lo que decía el detenido, siempre se quejan los detenidos de lo mismo, para fugarse.”(Mella). Y Curin, “A pesar de referir que le dolía el hombro, no dijeron nada en la comisaría, y tampoco le tomaron una denuncia. Refería como todos los detenidos que tenía una fractura para evadir la detención”.

Se dio por probado finalmente, que los funcionarios policiales no dieron cuenta la fiscal de turno de las lesiones producidas ni se tomaron acciones concretas tendientes a aliviar el padecimiento de la víctima, por lo que concluye el Tribunal que “(...) el padecimiento de Jorge Antonio Samanez Cabrera, en su condición de fracturado, se extiende desde pocos minutos de su detención, hasta su puesta en libertad, y llegada a la Posta Central donde es atendido adecuadamente, el día 01 de mayo de 2018, a partir de las 13.51 horas, cuando por sus propios medios hace ingreso, según da cuenta la prueba incorporada como PRUEBA DOCUMENTAL 3. Dato de Atención de Urgencia de la víctima Jorge Samanez de fecha 01 de mayo del 2018 del Hospital Alejandro del Río. Saliendo de la audiencia 13.51 horas”.

Por lo expuesto, a juicio de estos sentenciadores, el Tribunal de fondo no incurre en infracción alguna al principio de no contradicción en tanto el momento de la fractura o lesión provocada por el imputado Curín a la víctima no ha sido situado en dos circunstancias distintas o incompatibles entre sí, sino como producto de una secuencia de actos o maniobra de torsión aplicado en diversas ocasiones, sin mediar provocación ni resistencia de la víctima a la detención y a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

sabiendas de los antiguos problemas de que ésta padecía, lo que provocó la fractura en el húmero causándole un dolor ingente, que se incrementó al no prestarle el auxilio correspondiente a la gravedad de las lesiones.

Asimismo, lo relevante es que el Tribunal, de manera fundada y con base en los videos y declaraciones de los propios funcionarios de carabineros, descartó la tesis alternativa presentada por la defensa en torno a la oposición o resistencia de la víctima que habría justificado el uso de la fuerza, la que no logró ser corroborada con los medios de prueba producidos durante el juicio, dándose por establecido, por el contrario, que la víctima no opuso resistencia alguna a la detención.

De esta forma, no es posible observar en la sentencia proposiciones fácticas diversas referidas a escenarios idénticos ni, por ende, conclusiones asentadas en una sola de las proposiciones supuestamente contradictorias.

SÉPTIMO: Que, por su parte y en lo que respecta al principio de razón suficiente cuya infracción se alega, esta alegación será igualmente rechazada.

Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema, la razón suficiente es un subprincipio de la sana crítica inserto dentro de las reglas de la lógica en un sentido formal, es decir, la referida a las estructuras y procedimientos de nuestro pensamiento para el descubrimiento de la verdad, y *“(...) significa que todo juicio, para ser verdadero, ha menester de una razón suficiente. Se ha dicho que esta razón es suficiente cuando basta por sí sola, para servir de apoyo completo a lo enunciado, cuando no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero. La razón es insuficiente cuando no basta por*



sí sola para abonar lo enunciado en el juicio, sino que necesita ser complementada con algo para que éste sea verdadero. (García Maynez, citado en ibídem, pág.248). Su formulación puede reducirse a que todo conocimiento debe estar suficientemente fundado, lo que, llevado al escenario del proceso, implica una exigencia de motivación de la sentencia. Desde esta perspectiva, se advierte, que el principio de la razón suficiente se diferencia de los otros principios de la lógica, ya que más allá de la corrección formal del razonamiento, exige investigar el fundamento material de lo enunciado, lo que equivale a la prueba, y con ello refiere al fondo de las premisas.

Como se observa, el principio de la razón suficiente engarza plenamente con el deber de fundamentación de las sentencias, especialmente en un sistema racional de valoración de la prueba como es la sana crítica, en el cual es requisito sine qua non para la aceptación de un enunciado probatorio como verdadero, las motivaciones que se puedan aportar para sostenerlo. Motivar una decisión es justificarla, es aportar razones que apoyen la resolución adoptada” (Sentencia Corte Suprema de 10 de mayo de 2024, Rol N°19.604-2023).

En el mismo sentido, en causa Rol N° 16882-2015, en su considerando décimo tercero, la Corte Suprema ha indicado: “Respecto a la desatención de la regla de la lógica de la razón suficiente en la fundamentación de la sentencia, que arguye el arbitrio, dicha regla demanda que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente (SCS Rol N° 21.304-2014 de 5 de mayo 2015), por lo que para postular con éxito la vulneración de esta regla, necesariamente se requiere que el



impugnante identifique el hecho cuya existencia ha tenido por demostrado la sentencia -presencia del acusado en el lugar de los hechos, por ejemplo- y que genera la disconformidad de su parte y, luego, que puntualice las afirmaciones o proposiciones con que la sentencia tuvo por probado dicho hecho -por ejemplo, reconocimiento del acusado por un testigo presencial o que el apodo entregado por la testigo del autor corresponde al del acusado- y que no se hayan fundamentadas en una razón que las acredite suficientemente -por ejemplo, que el testigo presencial reconoció a un tercero y no al acusado, o que el apodo del autor aportado por el testigo corresponde a un tercero y no al acusado-, de manera de evidenciar que el hecho dado por acreditado no es compatible con una estructura racional del pensamiento donde el denominado “consecuente” debe hallarse necesaria y estrechamente vinculado con el “antecedente”.

De conformidad a la doctrina expresada, el principio de razón suficiente se encuentra inescindiblemente unido al deber de fundamentación de las sentencias, siendo indispensable para la aceptación de un enunciado probatorio como verdadero, las motivaciones que se puedan aportar para sostenerlo. Así, y para estar en presencia de una infracción al principio de la razón suficiente se requiere que el impugnante: 1° Identifique el hecho cuya existencia ha tenido por demostrada la sentencia; 2° Puntualice los datos externos con que la sentencia tuvo por probado dichos hechos; 3° Señale en forma específica que dicha o dichas proposiciones fácticas no se hayan fundamentado en una razón que las acredite suficientemente, de manera unívoca.



OCTAVO: Que, en el caso en análisis, como se ha dicho, y luego de reproducir sin mayor explicación páginas completas de la sentencia impugnada y en una exposición extremadamente confusa y prácticamente ininteligible—, afirma que el hecho o afirmación que dio por probada el Tribunal, es decir, que el acusado cometió el delito de apremios ilegítimos *no tiene una razón suficiente, un razonamiento constituido por inferencias adecuadamente deducidas de la prueba, y ni si quiera es que haya una contradicción, sino que lisa y llanamente hay omisiones importantes en el razonamiento de la sentencia, en consecuencia tampoco es concordante, dicha conclusión, en cuanto a que no responde adecuadamente a un elemento de convicción del cual se puede inferir aquélla (la conclusión)*”.

En particular, a su juicio el tribunal de mayoría debió haber indicado aquellos hechos o circunstancias que desestimó, y aquellas circunstancias que derechamente fueron omitidas en la sentencia, no indicando motivo alguno para desestimar o razonar de porqué en definitiva no se tomó en consideración diversas alegaciones que se hicieron por parte de esta defensa. Con base en ello, sostiene que la sentencia debió dar por establecido que atendido a las características de las circunstancias acaecidas y encontrándose dentro de las hipótesis que nuestra legislación establece como delitos flagrantes, el personal policial realiza todos los actos necesarios para finalmente lograr la detención de la ahora presunta víctima, existiendo resistencia por ella, provocando en el personal policial adoptar procedimientos acordes, en este caso aplicar la fuerza necesaria para superar la resistencia ejercida por la presunta víctima conjuntamente con las técnicas de esposamiento enseñadas en Carabineros.



Luego de transcribir estos diversos pasajes de la sentencia, a continuación y pretendiendo el recurrente que esta Corte deba adivinar o descifrar las supuestas infracciones cometidas en la sentencia, el recurrente se limita a señalar que en “(...) *ninguno de los razonamientos reproducidos se hace referencia, mención, o siquiera algún tipo de ponderación, ya sea positiva o negativa, ante las distintas preguntas que se le hicieron por parte de los acusadores y la defensa, a lo señalado por los siguientes testigos*” cuya declaración nuevamente se limita a reproducir.

Acto seguido, sostiene que resulta relevante la falta de pronunciamiento absoluto del tribunal respecto a lo declarado por la víctima “*En el trayecto se detienen en un sitio eriazo donde no se veían viviendas, cosa que le llamó la atención...*”, debiendo existir en la parte tanto expositiva como resolutive de la sentencia los argumentos tanto que benefician como aquellos que perjudican a las partes, argumentación que se encuentra ausente en la sentencia recurrida pese a la relevancia de lo indicado. Asimismo, a su juicio el Tribunal habría omitido elementos relevantes de la declaración de Ignacio Eliseo Opazo Monares, Sargento 2do de Carabineros, del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, quien durante la audiencia expuso “*que al momento de confeccionar el informe mantenía 6 meses asuntos internos, lo cual fue omitido en la sentencia*”. Lo anterior a su juicio, evidencia “*la falta de objetividad y consideración en los argumentos y prueba expuesto a lo largo del Juicio Oral, pues ante lo expresado, el tribunal resuelve “(...) mayor abundamiento, pese a que a las defensas les incomodó el testimonio de los funcionarios de carabineros de Chile pertenecientes a la sección de Asuntos Internos...*” aplicando criterios subjetivos a su



decisión, perjudicando a su parte. Denuncia, asimismo que la sentencia habría omitido las alegaciones realizadas durante el juicio por la defensa y expuestas en los alegatos de clausura *“omitiendo información relevante sobre otros funcionarios de Carabineros que se encontraban en escena y que podría haber depuesto sobre el supuesto sonido de rotura del humero y gritos de la víctima, sumado al hecho que no se consigna una pericia audiovisual y de sonido que permitan entregar elementos objetivo y reveladores que permitan formar convicción objetiva”*. Finalmente, en cuanto a lo expuesto por la perito forense doña Patricia Dina Negretti Castro, quien sostuvo que *“la lesión se realiza producto de un mecanismo de torsión que provocó el dolor intenso, se produjo cuando estando en el piso se le levanta por detrás con el pie en la espalda, y llevando los brazos hacia arriba presionando con el pie hacia abajo...”*, se evidencia *“la ausencia de objetividad en la redacción de la sentencia que se recurre, perjudicando a esta parte en tanto esta declaración del informe pericial no se encuentra incorporada en lo expositivo de la sentencia de forma íntegra, lo que afecta directamente la valoración de la prueba, ya que solo se extrae una breve síntesis que no da cuenta de la valoración absoluta de la declaración sustancial de la perito incorporada. Este raciocinio debe constar de forma suficiente aquellas valoraciones favorables o desfavorables al acusado”*.

De estas largas transcripciones y argumentaciones vertidas en el recurso y en un intento de colegir lo alegado por el recurrente, para esta Corte resulta evidente que, junto con discrepar de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal, prácticamente la totalidad de las alegaciones involucran el examen directo de la prueba rendida en el juicio oral, cuestionando lo que dijeron los testigos y los peritos o



cómo lo dijeron, la contraposición entre sus declaraciones en torno al lugar en que se habría producido la fractura o lesión en la víctima, pero sin hacerse cargo de lo establecido por el tribunal respecto al mecanismo de torsión aplicado por el imputado; señalando los puntos relevantes en tales declaraciones que necesariamente debió llevar a los jueces a absolver al imputado por constituir un germen de duda que impedía alcanzar el grado de convicción que exige una sentencia condenatoria; o simplemente haciendo alusión a la omisión de hechos meramente periféricos, como la declaración del funcionario de asuntos internos en que se habría omitido su antigüedad de 6 meses.

Con ello, resulta patente que lo pretendido es que esta Corte revise la prueba rendida y realice una nueva valoración de la prueba, objetivo que es completamente ajeno a la naturaleza del presente recurso, intentando artificiosamente evidenciar contradicciones ya alegadas por la defensa durante el juicio y que los propios jueces del fondo examinaron y justificaron forma exhaustiva en su sentencia, tal como ha quedado en evidencia en los considerados anteriores.

Así como se ha visto, en el motivo octavo del fallo, el Tribunal Oral dedica un extenso razonamiento solo a la determinación de la cronología exacta en que sucedieron los hechos, el momento exacto de la lesión y todas las circunstancias y hechos posteriores a esta, siendo evidente a juicio de esta Corte que la totalidad de la prueba que se aportó al juicio permite arribar a una única conclusión: el uso de fuerza indebida e injustificada por parte del imputado sin mediar provocación y a sabiendas de la enfermedad de que padecía, sin que la hipótesis alternativa en la ocurrencia de los hechos esenciales y periféricos postulada por la defensa en torno a la supuesta oposición o resistencia “tenaz” de la víctima pudiera ser mínimamente



corroborada con el escaso material probatorio allegado al juicio y en particular por el presentado por la defensa en abono de esta afirmación. Del mismo modo, como ha quedado debidamente asentado, el tribunal se hizo cargo pormenorizadamente de todas y cada una de las supuestas contradicciones existentes entre declaraciones de los testigos y peritos y que alegó la defensa en su oportunidad, sin que sea posible observar por esta Corte omisiones o imprecisiones en el argumento probatorio desarrollado por los sentenciadores.

Por lo expuesto, y examinada la sentencia bajo el marco que exige el principio de la razón suficiente, es posible advertir que este principio se cumple con creces en la sentencia impugnada desde que la totalidad de la prueba que se aportó al juicio permite arribar a una única conclusión la cual deriva, como se ha examinado, del examen de la totalidad de la prueba rendida, señalándose las razones justificativas y objetivas que tuvo el tribunal para dar por corroborados los hechos afirmados por la acusación y desechar la tesis alternativa sostenida por la defensa mediante el señalamiento y la valoración individual y conjunta de cada uno de los medios de prueba aportados al juicio. Que la defensa esté o no de acuerdo con dicha valoración y su mérito, es cuestión propia de un recurso de apelación, pero no del arbitrio que se examina.

NOVENO: Que, en definitiva y al contrario de lo sostenido por la defensa en su recurso, de una atenta lectura del fallo es posible colegir que el Tribunal de fondo, de forma fundada y dando cuenta de cada uno de los pasos seguidos en su razonamiento probatorio, ha basado su decisión condenatoria en un cúmulo de medios probatorios que han permitido establecer como ciertos, más allá de toda duda



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

razonable, los hechos o enunciados fácticos afirmados por la acusación: el ejercicio de fuerza irracional e innecesaria, a través de un mecanismo de torsión que provocó la fractura del humero derecho de la víctima; y desvirtuar, al mismo tiempo, la tesis alternativa sostenida por la defensa del acusado en torno a la resistencia “tenaz” que habría opuesto la víctima al momento de su detención, cuya probabilidad de acaecimiento no logró ser corroborada a través de la prueba rendida en el proceso, ni menos aún por la prueba rendida por la defensa, la cual fue debidamente valorada.

DÉCIMO: Que consecuente con todo lo expuesto, esta Corte no avizora de manera alguna la forma como la sentencia podría infringir o vulnerar los principios que gobiernan la valoración de la prueba, siendo posible encontrar en la sentencia los argumentos necesarios que permiten entender las razones por las cuales se arribó a la decisión de condena de una forma fundada y racional.

Por los fundamentos expuestos y lo previsto en los artículos 372, 374, 376, 378 y 384 del Código Procesal Penal, se **rechaza** el recurso de nulidad deducido por las defensas del acusado **Felipe Andrés Curín Córdova** en contra de la sentencia de ocho de mayo del año en curso, dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en la causa RIT N°429-2023, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la abogada Integrante señora Renée Marlene Rivero Hurtado.

N°Penal-3500-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQTPF



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V., Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena C. y Abogado Integrante Renee Rivero H. Santiago, siete de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a siete de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QJMJPQPTPF